

RESOLUCIÓN N° DP-DPG-DASJ-2022-013

Dr. Ángel Benigno Torres Machuca
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución de la República establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.

Que, a fin de que se pueda brindar el servicio de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria, el artículo 193 *ibídem*, dispone que las organizaciones deben acreditarse y ser evaluadas por parte de la Defensoría Pública.

Que, los numerales 9 y 10 del artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen la competencia de la Defensoría Pública para autorizar y supervisar el funcionamiento de servicios jurídicos gratuitos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de instituciones o personas distintas de la Defensoría Pública así como para establecer estándares de calidad y normas para su autorización de funcionamiento y permanente evaluación.

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial, es facultad del Defensor Público General, expedir mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimiento y cuanto instrumento se refiera para funcionar eficientemente.

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 293 de la norma descrita; y, en los literales b) inciso segundo y c) del artículo 24 del Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de Consultorios Jurídicos Gratuitos aprobado mediante Resolución N° DP-DPG-2013-021 de 13 de mayo de 2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 4 de 30 del mismo mes y año, la autorización de funcionamiento de dichos Consultorios emitida por la Defensoría Pública tiene una vigencia de un año, a la conclusión del cual puede procederse a su renovación para un período igual.

Que, mediante Resolución N° DP-DPG-DAJ-2021-028 de 12 de marzo de 2021, se establece los requisitos que deben presentar los Consultorios Jurídicos Gratuitos para el proceso de acreditación: autorización de funcionamiento y renovación de autorización de funcionamiento.

Que, el Defensor Público General, encargado, mediante Resolución N° DP-DPG-CNG-DAJ-2018-100 de 24 de octubre de 2018, con fundamento en los artículos: 193 de la Constitución de la República; 286, 292, 293 y 294 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, en la Disposiciones Transitoria Primera del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría Pública, publicado en Registro Oficial,



edición especial N° 110 de 18 de marzo de 2014, expidió el Reglamento Interno de funcionamiento del Comité de Acreditación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos.

Que, Mediante Resolución No. DP-DPG-DASJ-2021-139 de 18 de noviembre de 2021, la Defensoría Pública, acreditó por un año al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay, en las siguientes materias: Civil, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Constitucional, Inquilinato, Laboral, Movilidad Humana, Penal, Tierras, Administrativo y Violencia Intrafamiliar.

Que, el Coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay, en oficio 106-21-CJ-UDA de 14 de diciembre de 2021, ha solicitado a la Directora de Consultorios Jurídicos Gratuitos, solicita se incremente la materia de Ejecución de la Pena.

Que, a través de Informe N° DP-DNCJG-2021-223 de 14 de diciembre de 2021, la Directora de Consultorios Jurídicos Gratuitos aprueba el informe correspondiente, recomendando al Comité de Acreditación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos se proceda con el incremento de la materia de Ejecución de la Pena, a favor del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay.

Que, el Comité de Acreditación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos en sesión ordinaria N° 012-2021 de 20 de diciembre de 2021, que se realizó mediante videoconferencia, inició a las 09h09, conoció y aprobó en consenso el informe técnico N° DP-DNCJG-2021-223 de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección de Consultorios Jurídicos Gratuitos respecto de la solicitud de incremento de la materia de Ejecución de la Pena, en la Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay.

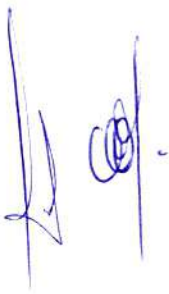
Que, mediante Memorando N° DP-DCJG-2021-0090-M de 21 de diciembre de 2021, la Directora de Consultorios Jurídicos Gratuitos, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica: *“Por medio del presente remito a Usted el acta de la sesión ordinaria No.012-2021 de fecha 21 de diciembre del 2021 elaborada por la dirección de Consultorios jurídicos gratuitos y aprobada por el Comité de acreditación de Consultorios Jurídicos Gratuitos, para la elaboración de las resoluciones...”*, al amparo de las decisiones adoptadas en la sesión ordinaria N° 012-2021 de 20 de diciembre de 2021 del Comité de Acreditación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos”.

Que, de conformidad con la Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, N° PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018, de 31 de agosto de 2018, fue designado el doctor Ángel Torres Machuca, como Defensor Público General, encargado.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el incremento de línea de servicio y materia de Ejecución de la Pena, a la acreditación realizada a la Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay, a partir de la fecha en que le sea notificada esta Resolución, sin perjuicio de la evaluación permanente y el control aleatorio que pueda realizar la Defensoría Pública respecto al cumplimiento de sus funciones y la calidad de los servicios prestados y de



las recomendaciones que deben cumplir acorde al informe N° DP-DNCJG-2021-223 de 14 de diciembre de 2021.

Artículo 2.- Los servicios de asesoría y patrocinio que prestará el citado consultorio jurídico respecto de las materias acreditadas, deberán desarrollarse conforme a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, y los Reglamentos y Políticas emitas para el efecto por la Defensoría Pública.

Artículo 3.- Por intermedio de la Dirección de Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Defensoría Pública póngase en conocimiento del contenido de la presente resolución al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay.

Artículo 4.- Se dispone a Secretaría General la publicación de la presente resolución en la Página Web de la Defensoría Pública.

Notifíquese.-

Emitida y suscrita en la Defensoría Pública, en Quito D.M., el 5 de enero de 2022.


Dr. Ángel Benigno Torres Machuca
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL (E)

Elaborado por:	Ab. María Elena Vinueza C. Experta Jurídica 2	
Revisado por:	Dr. Franklin Poveda Freire. Director de Asesoría Jurídica	